



SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL
MESA GOBERNABILIDAD Y PAZ

LIDERES SOCIALES, EXCOMBATIENTES DERECHOS HUMANOS Y DERECHO A LA VIDA

FORO VIRTUAL | WWW.YOUTUBE.COM/UNICAUCAPOPAYAN

Jueves 11 de junio de 2020 | 2:00 a 4:00 p.m

Angélica Navarro Monterroza

Directora del Observatorio de Desplazamiento, Conflictos
y Construcción de Paz
Universidad de Cartagena

INVITADOS:

Oscar Arango Gaviria

Coordinador Mesa Gobernabilidad y Paz -SUE

Amanda Ríos

Consejo Nacional de los Comunes - Partido FARC

Equipo de Paz

Universidad del Cauca

Hermes Pete Vivas

Consejero Mayor y Representante Legal
del Consejo Regional Indígena del Cauca -
CRIC- y Rector Universidad Autónoma
Indígena Intercultural UAIIN, Pueblo Nasa.

Camilo González Posoo

Presidente Instituto de Estudios para el
Desarrollo y la Paz -INDEPAZ.

Jorge Luis Montes Hernández

Proceso Pacífico de Reconciliación e
Integración de la Alta Montaña



Tabla de contenido

Apertura. Oscar Arango Gaviria	4
Contextualización del foro. Angélica Navarro M.....	5
Intervención Camilo Gonzales Pozo	7
Intervención Jorge Montes Hernández.....	14
Intervención Hermes Pette Vivas	16
Intervención Amanda Rios	19
Intervención Luis Alfredo Londoño	24
Preguntas del público.....	29

Video del evento



Al dar inicio al evento la moderadora Angélica Navarro Monterroza señaló que la organización de este espacio fue posible gracias a todas las universidades públicas del país que integran la Mesa de Gobernabilidad y Paz del sistema Universitario Estatal (SUE), en coherencia con las agendas que las universidades han formulado desde sus planes institucionales para la construcción de una sociedad más equitativa y en paz.



Apertura.

Oscar Arango Gaviria
Coordinador Mesa De Gobernabilidad y Paz del Sue
Profesor Titular Universidad Tecnológica de Pereira



En nombre de la mesa de gobernabilidad y paz del SUE, que agrupa las universidades públicas de país presentamos un saludo a quienes nos acompañan. Este evento hace parte de una agenda de deliberación pública que se ha propuesto desarrollar para beneficio de la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

Es parte de los compromisos desde la academia con la paz del país. Hace tres semanas se realizó el primer evento de la agenda que se denominó “Paz, salud y pandemia”.

En esta oportunidad se desarrollará una reflexión denominada “Líderes sociales, excombatientes, derechos humanos y derecho a la vida”. Un tema que debe encabezar en la coyuntura, las preocupaciones de la academia con la paz.

Nuestros ponentes invitados fueron:

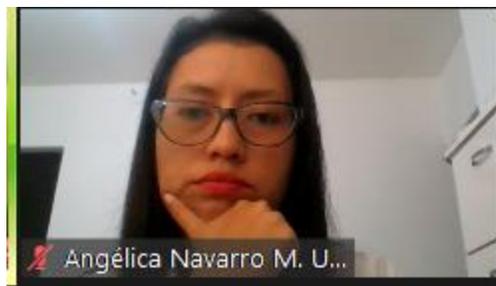
- Camilo Gonzales, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ
- Amanda Ríos, integrante del Consejo Nacional de los Comunes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
- Hermes Pete, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca y rector de la Universidad Autónoma Indígena e Intercultural del país.
- Jorge Luis Montes, dirigente del Proceso Pacífico de Reconciliación e Integración de la Alta Montaña.
- Luis Alfredo Londoño del equipo de paz de la Universidad del Cauca

A todos les agradecemos por compartir sus reflexiones.

Contextualización del Foro:

Angélica Navarro Monterroza

**Directora Observatorio de Desplazamiento,
Conflicto y Construcción de Paz
Universidad de Cartagena.**



Al dar inicio a su intervención la moderadora señaló la importancia del contexto en el que se enmarca el evento, destacando la declaración de los rectores de las universidades públicas del país en la que se respalda y valora la construcción de una paz estable y duradera, recordando que desde los años 60 hasta la actualidad, las instituciones públicas de educación superior han hecho importantes aportes en los campos académicos, investigativos y de interacción social.

Seguidamente mencionó que las universidades en su ardua labor por edificar una sociedad más justa y equitativa, mediante el desarrollo de procesos de observación han encontrado a través de múltiples fuentes de ONGs, entidades gubernamentales e intergubernamentales, como la defensoría del pueblo, la oficina de la alta comisionada de la ONU, un incremento exponencial y diversificación de las formas de la violencia contra los líderes y lideresas sociales en el país.

Citando diversas fuentes como la del programa Somos Defensores, que indica que entre el año 2010 y el primer semestre del año 2019 se registró un total de 3.134 casos de amenazas y agresiones, entre el 2016 y 2017 un aumento del 16.42%, pasando de 481 agresiones a un total de 560. Compartió cifras importantes como las que publica la defensoría del pueblo, que revelan un total de 72 alertas tempranas entre 2019 y 2020 por coexistencia, fortalecimiento y confrontación armada de actores ilegales y estructuras de crimen organizado donde se indica la existencia de riesgo a la vida y seguridad de las comunidades principalmente en Antioquia, Cauca, Bolívar, Norte de Santander entre otros departamentos.

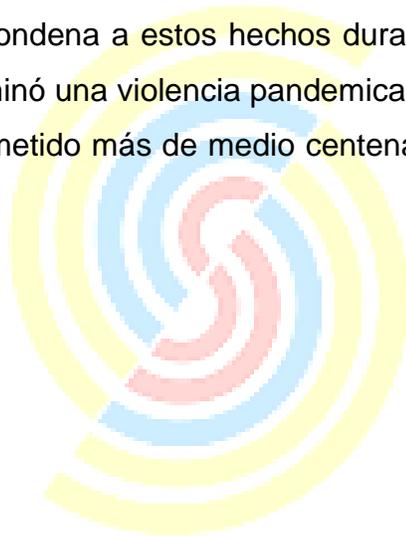
En su intervención relató que el primer asesinato del año en curso contra un líder social fue perpetrado el 7 de enero y desde entonces no ha cesado la violencia hasta la fecha.

Destacando que según las cifras de Indepaz hasta comienzos del mes de mayo de este año 135 líderes fueron asesinados junto con 25 excombatientes de la desmovilizada guerrilla de las FACR-EP.

Así mismo indicó que la falta de garantías de seguridad ha obligado a muchos excombatientes a abandonar los lugares donde llevaban su proceso de reincorporación, que no han cesado los desplazamientos forzados y además continúan los problemas ambientales ligados a la minería ilegal, la deforestación y los atentados a los oleoductos.

Múltiples han sido las voces de rechazo frente a estos hechos y la Mesa de Gobernabilidad y Paz se une a ellos, en especial durante la pandemia.

La comisión interamericana de derechos humanos también ha expresado su enérgica condena a estos hechos durante el año 2020, asimismo la ONU denunció lo que denominó una violencia pandémica contra líderes sociales en Colombia puesto que se han cometido más de medio centenar de asesinatos contra ellos desde comenzó el año.



SUE
Sistema Universitario Estatal

Intervención Camilo Gonzales Pozo
Magister Economía
Presidente Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ
Director de la revista Punto de encuentro.



Para hablar de la situación de los líderes sociales en medio de la cuarentena y la crisis sanitaria, es necesario recordar que se ha tenido una situación bastante crítica en el departamento del Cauca por persistencia de violencias.

Vale la pena recordar un contexto en el cual esto se ha dado en el último periodo; efectivamente se tiene persistencia de violencias pero dentro de una nueva situación, hay un cambio en cuanto a actores, a dinámicas, y al mismo tiempo, unas continuidades de violencias estructurales que vienen desde el periodo pasado, pero el acuerdo de paz significó un punto de referencia importante para ver cambios, como la desarticulación de las FARC como un ejército guerrillero, que en particular en el departamento del Cauca significó la disminución de la violencia. Hay indicadores de conflictividades bélicas directas, heridos en combate, secuestro, desplazamiento forzado, entre otras manifestaciones de la violencia, que cuando se inician las conversaciones de negociación en el 2012, se evidenció una inflexión en las curvas de indicadores de violencia en el departamento en una tendencia que venía de tiempo atrás.

Esto no quiere decir que hayan cesado las violencias y conflictividades que han sido estructurales en el departamento, pero que hay que tener en cuenta el peso de la estructura que tenía cinco frentes y/o columnas móviles y el paso de ello a la acción política. Por un lado se produce un cambio en lo que tiene que ver con el control de territorio; en el departamento del Cauca, las FARC llegaron a tener incidencia en por lo menos 24 municipios, con una fuerza y capacidad de perturbación, conflictividad y hostilidad mortales. Los cambios en las disputas de control territorial es algo a tener en cuenta que tiene que ver con las economías de guerra y con las rentas en el conflicto, que caracterizaba la estrategia político-militar de las FARC que cambió, y no es poca cosa, porque se tienen las economías ilegales como la explotación de los cultivos de coca, los impuestos la participación de rentas en el procesamiento y tráfico de cocaína y de armamento.

Para el 2010 se registraba al rededor de cien toneladas métricas de cocaína que salían por los corredores del Cauca, de esto, el 30% podía tener algún tipo de incidencia en las finanzas de las FARC al retirarse del escenario y de alguna manera a ser reemplazados por otros o al entrar en disputa ese vacío, allí ya hay un elemento de continuidad que va a marcar el periodo siguiente.

También en las economías del oro, en la parte de Suarez, de Buenos Aires, también hay una modificación de controles y de participación de rentas.

Estos factores no deben dejarse de tener en cuenta ya que fueron previstos en los acuerdos de la Habana ¿qué pasaba con los territorios de influencia o de operación o de impacto en el momento más crítico de la confrontación con las FARC? Por esto se hicieron provisiones en los diferentes componentes del acuerdo, tanto en reforma integral, como de apertura política, seguridad, política de drogas, víctimas, justicia y verificación; uno de los elementos a considerar era cómo se trataba el post acuerdo en relación a los territorios y a las comunidades, no solamente a la reincorporación y a los aspectos más generales de la política.

Hay que tener en cuenta cómo se ha dado ese replanteamiento o de reordenamiento de fuerzas en el territorio. Ha pesado los reincidentes de FARC, se habla de entre un 2 a 4% de reincidentes, algunos mandos de poca jerarquía de algunas zonas de Caloto, de Corinto. Otro fenómeno es el tema de los residuales, algunas personas que participaban de las esferas económicas de la estructura criminal, que no era parte directa de la misma pero busca darle continuidad a tareas de seguridad y de negocios, dando paso a una reconfiguración de algunos grupos que se integran con pequeños números de reincidentes y nuevos reclutamientos y que inicialmente entre ellos se imparten luchas por el control, dando como resultado la baja de algunos de los jefes de estas organizaciones para tratar de influir en las rentas de la marihuana y de la coca en las zonas de Argelia y hasta la ruta de Micay, que son los dos puntos más significativos en esta perspectiva.

Esta reconfiguración de grupos en el Cauca, no es equivalente a la situación anterior con las FARC. NO hay una organización con unas pretensiones de estructura nacional, con unas jerarquías, tradiciones, mandos y formación política de décadas y persistencia en luchas guerrilleras, con un discurso ideológico y justificación marxista; este

cuerpo ideológico y político de incidir en el poder en las transformaciones sociales como justificación de existencia, deja de tener el mismo peso no solamente numérico sino desde el punto de vista cualitativo; aunque mantienen un lenguaje político no se puede decir que es lo mismo. Su existencia se ha justificado y ha tenido una dinámica en función de rentas. No se niega que puedan tener derivaciones hacia el narcotráfico y algunos ser seducidos por las dicidencias políticas de Ivan marques y el frente primero, pero lo esencial ha sido una dinámica distinta, no tienen vocación de confrontación con la fuerza pública, no tienen proyecto de poder, no es un movimiento insurgente que se pueda comparar con lo que se dió en los sesenta años anteriores; es un fenómeno nuevo que aun es flexible.

Este no es el único factor de las dinámicas de persistencia de las violencias. El fenómeno del narcotráfico hay que analizarlo con seriedad en el departamento del Cauca. En el último periodo el Cauca ha pasado a ser el segundo o tercer productor junto con Nariño, Putumayo y catatumbo, que concentran por lo menos el 60% de la producción de hoja de coca y los insumos para la transformación en cocaína y su exportación; se estima que hay unas 22 mil hectáreas en plantaciones hacia en noroccidente del departamento. Esto está articulado por mafias, y los dueños no son el ELN, que ha tenido una dinámica de permanencia y expansión en la zona del Tambo y con incursiones hacia municipios vecinos, pero tampoco lo son estos grupos residuales como la “Dagoberto, o la Jaime Martinez, o la Carlos Quiñones”; estos son grupos que dependen realmente de capos del narcotráfico nacionales y sus eslabones internacionales. Los dueños del negocio, los que pagan sicarios, los que traen armamento, quienes realmente tienen un peso muy grande y constituyen un elemento de violencia estructural muy fuerte.

También hay otros factores críticos que persisten de tiempo atrás como lo son las disputas por tierras en zonas por dinámicas ilegales sino de expansión de cultivos con conflicto con campesinos, indígenas, donde hay agentes violentos que buscan prestar “servicios de seguridad” o que actúan en función de intereses de grupos privados. Adicional a ello, el tema de la ocupación minera que no es poca cosas en zonas como la Vega, hacia el macizo, en Mercaderes, que ha tenido un impacto tremendo de violencia y que son persistentes.

En conclusión, hay unas violencias estructurales que han continuado, hay unas mutaciones de violencias pero sobretodo hay una insuficiencia de las políticas, siendo este último el elemento principal y central en el análisis de lo que pasa con las dinámicas de violencia y las conflictividades con persistencias armadas en el departamento. Y es que la respuesta del Estado ha sido insuficiente, no solamente de este gobierno, sino desde el gobierno anterior.

Sabido que se generaría una disputa por el tema de las rentas del narcotráfico y de la coca, se planteó el programa de sustitución de cultivos, la política antidrogas y la reforma rural integral, articuladas con una apertura política con unas zonas especiales para Planes de Desarrollo Territorial, sino como zonas especiales también para apertura en la medida que han estado ubicadas para las circunscripciones especiales de paz. Una política de incorporación o de territorio sino de comunidades. En el año 2017 se abrió la estrategia de sustitución en el país, el gobierno lanzó una ofensiva conjuntamente en acuerdo con las FARC, el plan de acción integral para neutralizar la evidente y potencial arremetida de las mafias para capturar esas poblaciones y darle continuidad al negocio. Se proyectó un plan de un año con unos auxilios para las familias y para el segundo año se iniciaría con el plan nacional integral de sustitución.

En este sentido, el plan de acción integral fue concebido como una medida de urgencia para establecer un puente con las comunidades, neutralizar a las mafias, darle una capacidad de subsistencia a las comunidades mientras llegaban los programas del gobierno.

Sin embargo, particularmente en el departamento de Cauca, hubo una debilidad; fácilmente más de 15.000 familias manifestaron su voluntad de acudir a la legalidad sustituyendo cultivos, pero la respuesta del Estado fue muy tímida. Por ejemplo en Argelia, las comunidades presentaron la propuesta de zonas de reserva campesina con un plan para el desarrollo alternativo, manejo de reserva forestal, un plan económico bien articulado pero el gobierno tuvo vacilación porque había una concepción de que eran zonas no controladas militarmente. Ni entonces ni ahora se les dió respuesta masiva, suficiente, rápida oportuna, para poder neutralizar la arremetida del narcotráfico de las mafias de todos los sectores y de la recomposición de los residuales que querían darle continuidad al negocio.

Estamos pagando las consecuencias de una debilidad de iniciativa del Estado. Una de las cosas que dice el Dr. Achila (Alto Consejero para la Estabilización de Iván Duque), es que al gobierno le tocó recibir doscientas mil hectáreas (para algunas cosas utilizan las cifras de nacionalidad y para otras las del departamento de Estado de EEUU), por lo que no han podido responder dado que son muchas personas. Sin embargo ya van dos años, no se han apropiado los recursos, no se han formulado los planes, sabiendo que es una situación de emergencia; un asunto que afecta en Colombia a cuatrocientas mil familias en las zonas cocaleras, y en departamento del Cauca; treinta mil familias en los cultivos de coca y de forma indirecta son cincuenta mil familias. Esto solo hablando de coca, no de otros cultivos ilegales.

Hay que decir que la negligencia, la omisión, la insuficiencia, la polarización y la incoherencia en las pugnas internas en la elite política, el pretender que esto es un asunto de policía y ponerle la tarea al ejército o la policía de enfrentar un problema sin instrumentos; ha habido una determinación política de los asuntos de orden público.

¿Por qué persisten las conflictividades violentas en el departamento del Cauca en este aspecto? Porque hay una insuficiencia en estas políticas. En el norte del departamento, Toribío, Caloto, se habla de ocho mil pequeños productores que tienen pocas plantas en sus terrenos; no son cultivos hidropónicos complicados, lo que quiere decir que más o menos doce mil campesinos e indígenas tienen pequeñas parcelas de marihuana y hoy tienen una producción que es importante en la oferta nacional, en una cadena que va hacia comercializaciones hacia el centro del país y exportaciones hacia el Brasil y el cono sur, Argentina. Se habla de un comercio de varios millones de dólares.

Ahora, hay una política en Colombia, de transformación de la marihuana en una actividad legal para la industria farmacéutica y otros usos sanos. En EEUU, es su mayor parte, la marihuana está legalizada para usos farmacéuticos y para usos recreativos.

En Colombia hay asociaciones que han solicitado al gobierno las licencias para producir marihuana de forma legal, dentro de las políticas que hoy en día lo permiten; sin embargo, siendo el Cauca uno de los mayores productores, no han obtenido por parte del gobierno esta autorización, contrario a Antioquia, Cundinamarca y Santander que ya están legalizados para producción farmacéutica.

El departamento del Cauca por ser población indígena, campesina, que han estado en lucha y resistencia, han sido discriminado en la política central.

Por otro lado, tenemos el retraso en los planes de reforma rural integral; una negativa histórica a responder a las aspiraciones en materia de tierras y de ordenamiento territorial en el Cauca. Se han burlado las aspiraciones indígenas. En los primeros años del siglo XX y durante la administración de Uribe, hubo una negación a entregar tierra a las comunidades indígenas.

Conocer los acuerdos que han sido pactados con mucha anterioridad e incluso en acostecimientos como en la masacre del Nilo, cuando el gobierno se comprometió a asignar nuevas tierras; incumplimiento total a demás de una respuesta discriminatoria y menosprecio de las comunidades indígenas, de burla de los compromisos. Podemos recordar a ciertos funcionarios del gobierno que se refieren con actitud despectiva, estigmatizante, absolutamente vergnzoza en contra de los pueblos indígenas del Cauca, en donde afirman que “a los indios se les firma cualquier cosa en la carretera pero después no se les cumple”; esto es la realidad del gobierno nacional.

Tampoco se ha dado una respuesta a los empresarios del Cauca. La opción del gobierno es la inversión extranjera, o se alían o desocupan; y es lo que ha pasado. Han vendido, desvertebrando la capacidad empresarial en el departamento. En Colombia, el sector agrícola ha tenido vuelo cuando de apoyo del Estado se habla. En el norte del departamento hay industria azucareca porque está subsidiada gracias a la mezcla de etanol con gasolina; está garantizado el mercado. Les compran y les pagan por anticipado. La industria maderera también es fuerte en el departamento pero por las granes compañías extranjeras y los oligopoleos.

Las conflictividdes que hay tienen que ver por, situaciones históricas, por el impacto de las economías ilegales y por el fallo de las políticas que estigmatizan. Al analizar la situación de líderes asesinados, tiene mucho que ver estos factores y también que no ha habido un discurso de paz unificado dede las éltes políticas de Colombia; se firmaron unos acuerdos y un sector importante de las élites políticas se ha encargado de ponerle palos en la rueda, tratan de desfigurarlos, no cumplen con los compromisos de reforma rural integral, y la soclución es la presencia militar.

El departamento del Cauca está definido ahora como una zona estratégica de intervención integral, problema para la seguridad del Estado. El enfoque de seguridad de presidencia, cuando anunció el plan social para el Cauca, fue “el país está amenazado por estructuras criminales transnacionales que están en el Cauca, y sus representantes son grupos criminales como los disidentes, residuales, y todos esos grupos, además del narcotráfico que se creció por culpa del gobierno anterior”. En conclusión se enfoca en la seguridad para una guerra con enemigos transnacionales.

Los instrumentos de esta estrategia, militares en su componente central; la brigada 29 se fortalece, la FUDRA, anteriormente la fuerza de acción rápida que se utilizó para combatir a las FARC y que ahora se recompone con 2500 elementos para combatir estos grupos criminales, y la caballería ligera. Esto se acompaña con proyectos sociales de menor cuantía.

En conclusión, las dinámicas frente a los líderes, la continuidad de la situación, que se agrava en estos momentos de pandemia, tiene que ver con las fallas de política pública.

Por último, las comunidades organizadas del departamento del Cauca, también han ejercido un fortalecimiento de sus controles; también controlan territorio, no solamente las comunidades indígenas. Guardias indígenas, cimarronas, campesinas, y de juntas comunales, aproximadamente 30 mil personas movilizadas organizadas en guardias para ayudar a socorrer a la gente en la pandemia y en los problemas alimentarios. Chocan con una estrategia militar del Estado y de los grupos criminales; esto es parte de la explicación del porqué los ataques a los líderes sociales, líderes indígenas campesinos, comunitarios, agredidos por su fortaleza de organización, capacidad de ejercer control territorial, no se les permite el ejercicio de la democracia de base y por esto se toma al liderazgo social como objetivo de la agresión de estos grupos y de la omisión de la acción del Estado.

Intervención Jorge Montes Hernández
Situación de los líderes sociales en los Montes de María;
Lider social.
Proceso pacífico de reconciliación e integración de la
Alta Montaña.



Empezó su intervención exponiendo la crítica situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y líderes por la falta de garantías en materia de seguridad por parte del Estado como consecuencia de la no implementación del acuerdo de paz.

Desde el territorio de Montes de María, señaló que acogen y abrazan el acuerdo de paz en su totalidad y han exigido la implementación del mismo. Afirmando que el acuerdo que firmó el Estado con las FARC, es la semilla que se sembró, y le corresponde a la sociedad civil hacer que esta implementación sea real. A partir de la movilización social, conversatorios, entre otras acciones que conlleven a presionar de tal forma a que el gobierno entienda que estamos cansados de tantos años de conflicto.

Indicó que, en este momento, el gobierno es renuente a implementar el acuerdo, pero están llegando estructuras a los territorios que quieren tomar el control, y eso tiene al liderazgo social, a los defensores de derechos humanos, entre la espada y la pared.

Comentó que, en su caso, se encuentra desplazado del territorio desde hace cuatro meses por amenazas de muerte.

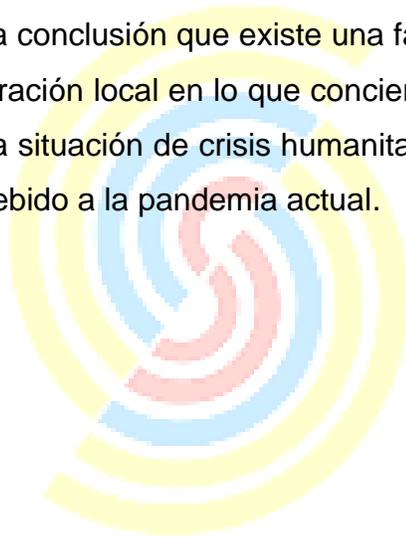
Luego explicó que el proceso pacífico de reconciliación e integración de alta montaña del Carmen de Bolívar, nace a raíz del conflicto que se vivía en la zona y que diariamente se registraban muertes selectivas, capturas sin orden judicial, falsos positivos, de los cuales fue víctima. Relató que ha estado encarcelado en dos ocasiones, acusado de ser miembro de las FARC sin justa causa.

Que existe una guerra psicológica que no deja que el líder campesino haga el trabajo social para que se implementen, desde el territorio, los acuerdos de paz; y esta paz sólo será efectiva si el Estado permite su implementación con las organizaciones de base, quienes son el motor del Estado, y quienes pueden llevar a una transformación social pacífica a partir de cambios estructurales.

La experiencia de los líderes en El Carmen de Bolívar, municipio al cual pertenece, se compone de un proceso pacífico con 14 corregimientos y 52 veredas, conformados todos en juntas de acciones comunales y asociaciones de campesinos. Afirma que tienen todo el fortalecimiento organizativo, pero no cuentan con el apoyo del gobierno.

Finalmente señaló que existen nuevas organizaciones armadas que han llegado al territorio con el fin de controlar dichas zonas y esto ha ocasionado graves problemas de seguridad a los defensores de derechos humanos que están al tanto de que se cumplan los acuerdos de paz.

Para terminar, comentando que el espacio regional de construcción de paz de Montes de María donde confluyen alrededor de 350 organizaciones sociales que han llegado a la conclusión que existe una falta de voluntad política por parte del gobierno y la administración local en lo que concierne a la situación de seguridad de los líderes de la zona y la situación de crisis humanitaria que hay en la zona debido a los escasos de alimento debido a la pandemia actual.



SUE
Sistema Universitario Estatal

Intervención Hermes Pette Vivas
Situación de los líderes sociales y las comunidades indígenas del Cauca
Consejero mayor y representante legal de Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
Rector de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural UAIN Pueblo Nasa



Hoy hablo en nombre de los 10 pueblos indígenas, 127 autoridades indígenas y la consejería mayor del CRIC y la Universidad Indígena UAIN.

Ha sido difícil la situación en los pueblos indígenas, campesinos, afros, que habitamos en el departamento. Todos los días hemos visto muertos en el territorio.

En el marco del proceso de paz del que tanto se ha hablado, no se ve el progreso; el Estado no quiso hacer cumplir los acuerdos que se habían pactado y esto ha llevado a situaciones complejas. Hoy contamos, en lo que lleva del año, más de 27 asesinatos en comunidades indígenas.

Uno no es líder porque quiere, es porque la comunidad ha confiado en nosotros, en este ejercicio para hoy estar dirigiendo y orientando esta organización, que es el CRIC y al mismo tiempo ser el rector de la UAIN, que se ejerce en el marco de la integralidad del gobierno propio.

Ha sido difícil el tener que enfrentar hoy, con nuestra guardia indígena, exponiendo las vidas por proteger a nuestras comunidades.

Las amenazas han sido bastante complejas; cada semana se reciben panfletos de las diferentes organizaciones criminales y armadas que se hacen llamar “Dagoberto Ramos”, “Jaime Martínez”, “Cartel de Sinaloa”, “Águilas Negras”, entre otras.

Vemos un Estado que no es eficiente frente a la protección colectiva que hemos propuesto desde las comunidades indígenas. A pesar de que en el marco de los acuerdos, desde la minga se planteó y entregó al gobierno un documento para la protección colectiva de los territorios, porque en este momento las amenazas no solamente son líderes, también a comuneros, sabedores ancestrales, entre otros.

En mi rol como autoridad indígena, en el año 2016 y 2017 tuve bastantes amenazas y un atentado del que afortunadamente salí libre y hoy poder estar al frente

de esta organización. En el ejercicio de gobierno propio, nos hemos encontrado, bien sea con el estado o con los grupos al margen de la Ley, con un sometimiento y una presión hacia las comunidades indígenas, queriéndonos llevar a tomar las armas.

Han sido tantas las presiones que en el año anterior empiezan las amenazas a nuestros líderes y comunidad en general. Sin embargo la fuerza de la guardia indígena no ha permitido que llegáramos a escenarios más hostiles y ha permitido siempre sobrevivir a las amenazas.

Como líderes sociales que viven en el territorio del Cauca, es muy preocupante el buscar muchas maneras para poder sobrevivir, como en el caso de algunos compañeros que deben salir de un sitio a otro, estar protegido por la comunidad y la guardia indígena, tener que tomar diferentes caminos; además de ello, las amenazas de desplazamiento en donde se ultima a dejar el territorio en lapsos de 72 horas.

La estructura propia y la resistencia de las comunidades han permitido hacer frente a tanta amenaza; inclusive a muchos líderes han ofrecido asilo en otros países. Pero siempre está el tema de que no se puede abandonar a la comunidad, a la gente en esta situación tan compleja, más hoy en día. Como representantes de las organizaciones, el hecho de salir huyendo conllevaría a derrumbarse una estructura que lleva casi 50 años de lucha.

No han sido pocos los que han muerto a manos del estado o de los grupos al margen de la ley.

En esta lucha, gracias a nuestros mayores que nos enseñaron la firmeza, la claridad y el ejercicio mismo del servicio a la comunidad y de no retroceder; en momentos difíciles que debemos afrontar como comunidades, líderes o representantes al frente de estos procesos. De igual forma las comunidades campesinas y afro.

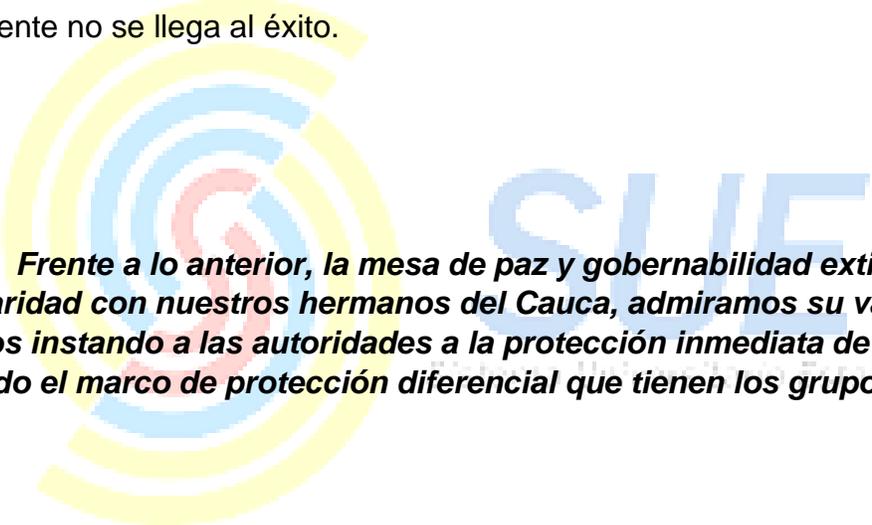
Hoy en día, tenemos en el departamento al rededor de 384 puntos de control por parte del CRIC, lo que no ha gustado a los grupos armados al no poder andar con libertad. Esto ha generado varios hostigamientos en donde la guardia indígena, en los puntos de control han quedado entre fuego cruzado. En las últimas semanas quienes atacaron a la guardia indígena en los resguardos de Jambaló y Pioya en Sa'th Tama Kiwe, en donde se termina con la captura de cinco personas sospechosas, tres de ellos

confirmados como disidentes de FARC, y dos que siguen en el marco de la jurisdicción propia.

A raíz de ello se han iniciado amenazas al CRIC, sin embargo, la ineficiencia del gobierno y la estigmatización y el exterminio físico y cultural de nuestros pueblos no ha sido fácil.

Seguiremos tratando de avanzar con la tarea de construir en nuestro sistema de gobierno propio y marco jurisdiccional y por nuestro derecho mayor y ley de origen que nos ampara para sobresalir a pesar de las situaciones difíciles que atraviesa el país entero.

Gracias por el espacio, y les extiendo la invitación a que nos unamos, a fortalecer el proceso colectivo para juntos hacer mucho más, porque cuando se piensa individualmente no se llega al éxito.



Frente a lo anterior, la mesa de paz y gobernabilidad extiende su solidaridad con nuestros hermanos del Cauca, admiramos su valentía, y seguimos instando a las autoridades a la protección inmediata de los líderes, recordando el marco de protección diferencial que tienen los grupos indígenas.

Intervención Amanda Ríos
Derecho a la vida e implementación de los acuerdos de paz
Consejo Nacional de los Comunes



Es importante que la mesa de paz y gobernabilidad del sistema universitario estatal genere esos espacios; es clave que desde las universidades permanezca la preocupación por el derecho a la vida y respeto a los derechos humanos de líderes, lideresas sociales y excombatientes.

Conocí la FARC desde la universidad, en medio de la cantidad de corrientes de ideas y siendo líder comienzo a trabajar con ellos como alternativa ante las injusticias.

Ingresé a las filas prácticamente acosada por la persecución y el acedio que experimentamos los líderes y lideresas a comienzos de siglo. En ese momento pensé que sí he de morir, que sea combatiendo.

Paradójico, que hoy, casi 20 años después, venga de un acuerdo de paz y siga con la preocupación por la vida de los líderes sociales y de los firmantes del acuerdo de La Habana.

Ahora soy combatiente por la paz, al igual que mis demás compañeros con los cuales hemos firmado este acuerdo.

Quiero resaltar la importancia del acuerdo de paz que firmamos y qué más que un texto con letra muerta, representa la posibilidad de abrir un nuevo ciclo en la historia del país y en primer lugar, la superación de la violencia política extrema que nos ha atravesado. Pero también que la cuerda contiene una serie de reformas que se han ido aplazando y que se requieren, como es el caso de la reforma rural integral o el caso la reforma política, que simplemente una sustitución voluntaria de los cultivos y sobre todo que se pueda resarcir a las víctimas que tanto han cargado con el peso de este conflicto.

No podemos perder de vista que, como lo señala el profesor Jairo Estrada, este acuerdo también genera una resistencia sistémica; han habido fracturas en los bloques de poder frente a si se hacía o no se hacía el proceso de paz.

Pero hay un bloque de poder que se aferra a la defensa de ese estatus y a la intensificación de la violencia paramilitar. De acuerdo con el profesor Camilo González, hay una nueva situación, nuevos actores, nuevas dinámicas. Existe la violencia política.

¿Qué es lo que hace que en Colombia se vulnere el derecho a la vida con la acción o la omisión del aparato Estatal? Allí es importante entender cómo han sido forma las fuerzas militares en el país, con una doctrina contrainsurgente, del enemigo interno; y gracias a esa doctrina muchísimos jóvenes fueron asesinados, vestidos de camuflado, pasados como falsos positivos resultados de bajas en combate y hoy en día ni siquiera se conoce el paradero de muchos de sus cuerpos.

Esa doctrina sigue en pie y una de las preocupaciones es que tenemos que cambiar; una doctrina que mira como enemigo interno a su mismo pueblo.

Esta doctrina se ha extendido incluso al acuerdo de paz; se escuchó de que este acuerdo era una conspiración comunista, toda la campaña antiplebiscito confundiendo a la gente, incluso con el tema de género. En medio de esto, la realidad es que unos sectores sienten amenazados su poder político y por eso han tratado de eliminar físicamente a la base social que pueda apoyar el acuerdo de paz.

En palabras de guerra de baja intensidad es “quitarle el agua al pez”, vemos que han sido asesinatos sistematicos a líderes sociales, a excombatientes, a defensores del acuerdo de paz, defensores de los derechos humanos, a quienes quieren implementar el plan nacional integral de sustitución de cultivos, a las víctimas de la violencia paraestatal.

También es importante entender que hay una cantidad de problemas que se han dado en la sociedad colombiana y que han estado ocultos bajo la cortina del manto del enemigo interno y justamente en el acuerdo se mira que todo esas contradicciones como es la justicia social o la violencia estructural.

Señalo a demás, las motivaciones económicas que pesan en la continuidad de la guerra. Quiero resaltar en primer lugar el jugoso negocio del que hacen parte, no son los capos que se mencionan en las noticias, sino también las personas influyentes en las altas esferas y miembros de la institucionalidad; también el peso que tiene en el suroccidente colombiano los corredores como entrada y salida de las diferentes mercancía, incluidas las ilícitas. Los proyectos a gran escala - minero energético - así como también la biodiversidad, que son potenciales para la industria farmacéutica.

No se puede desconocer que hay otros tipos de violencia como la insurgencia del ELN que continúa y que ha manifestado su voluntad de hacer diálogos, pero no ha encontrado eco en este gobierno.

Pueden haber otros grupos que se manifiesten en rebelión contra el Estado, sin embargo, el llamado es a llegar a una paz completa y eso pasa por la implementación del acuerdo de paz que existe y por generar acuerdos con las otras insurgencias.

Cabe recalcar que la implementación de acuerdo en un campo en disputa; una de las reflexiones que hemos aprendido es el valor de la palabra empeñada, y los acuerdos de paz son para cumplirlos. En el gobierno del presidente Santos se logró el acuerdo y se sentaron las bases normativas, pero también se abrió campo para el incumplimiento, incluso a llegar a ser, como se menciona hoy día, una “perfidia”, por el hecho de dejar en manos de la “derecha”, el acuerdo, para quitarle todo su contenido.

El acuerdo no era para beneficiar a las FARC, sino para beneficiar en conjunto a toda la población colombiana. En este se recogieron buena parte de las aspiraciones y propuestas mínimas de las organizaciones sociales, y es cierto que hubiésemos querido mayor participación, pero cuando se quiere superar una guerra hay cuestiones que toca aceptar en aras de poder avanzar en el proceso. Aún así, el grueso del acuerdo es en pro de todo el país, es importante que se puedan implementar los enfoques étnicos, de género.

Por ello es importante conocer el acuerdo como fuente primaria. La mayor parte de la población no conoce el acuerdo de paz, sólo escucha lo que otros dicen sobre el acuerdo, pero tenemos que ir a la fuente y conocer directamente y reflexionar lo que representa para nuestro país.

De igual forma, es importante conocer las herramientas para que ese acuerdo sea incorporado como política pública y pueda ser implementado y finalmente superar las hondas heridas que dejó el conflicto, también por el abandono Estatal.

Hay muchos informes, y mediciones acerca del estado de la implementación. Quiero resaltar una reflexión de Enrique Santiago que decía “nada está acordado, hasta que todo está acordado, nada está implementado hasta que todo esté implementado”, es decir, que el acuerdo de paz es un todo, en el que cada punto está relacionado entre sí; por lo que no es posible que se cumplan unos puntos y otros no. Es necesario que se

cumpla en toda su integralidad y de esta forma poder pensar en avanzar los diferentes tipos de violencia que sufre hoy el país, en particular el departamento del Cauca.

Decir que en este gobierno, el acuerdo de paz ha entrado a una nueva etapa, primero se decía que era “volver trizas el acuerdo”; ahora hay una tendencia a la simulación, una paz mediática, es decir, mostrar que se están cumpliendo los acuerdos, pero en la práctica no es así. Lo que ha predominado es el principio de la seguridad y la consolidación territorial en el marco de lo que ha llamado Duque “el pacto por la legalidad”. Esto es una reedición de la política de seguridad democrática.

También buscan decir se ha trabajado mucho en materia de reincorporación, pero no conforme a lo que está pactado. Quieren retroceder a los modelos de desmovilización, desarme y reinserción y esa es una lógica totalmente contraria a lo que se tiene. Sin embargo debo decir que ¿cómo vamos a hablar de reincorporación, si nos están matando? y traigo a colación una denuncia puntual y urgente, y es que el ETCR de Monte Redondo, ha sido notificado, el día de ayer, de una inminente amenaza del grupo armado que opera en esa zona diciéndoles definitivamente tienen que salir de ahí, que no quieren ver a un solo reincorporado ahí. Es una situación supremamente grave que amenaza el proceso de paz, amenaza el tema de la reincorporación y aprovecho este espacio para concitar todos los apoyos que sean posibles que permitan seguir trabajando el temas de paz en nuestros proyectos productivos, a la reincorporación, al desarrollo del departamento.

En cuanto a la reforma rural integral, el gobierno afirma que ya ha venido robusteciendo el fondo de tierras, aunque no se ha entregado un solo predio a los campesinos.

A la JEP la están considerando como si fuera una jurisdicción especialmente para castigar a las FARC pero no es de ese modo como ha sido concebida; es para una justicia restaurativa y sobre todo que se conozca la verdad de lo que ha pasado en este país. Se ha negado la posibilidad de la reparación colectiva a las víctimas y la clave son las instituciones transitorias especiales de paz. Esto un aspecto clave de la forma en como se esperaba, en el acuerdo de paz, resarcir al conjunto de las de las víctimas.

También resalto, que ahora, en el contexto del coronavirus, el gobierno ha aprovechado para emitir una serie de decretos y lo que menos hace es beneficiar los

acuerdos de paz ralentizando la implementación. Con respecto a esto, los recursos que hay para el tema de la paz están siendo gastados basados en la publicidad del presidente, siendo una muestra de cómo quieren desfigurar totalmente la paz.

Ante este panorama complejo no todo está perdido. Estamos en un momento en el que el grueso de colombianos y colombianas no quieren la guerra; todavía consideramos que podemos ganar ese pulso si realmente nos unimos y cuidamos ese árbol de la paz para que de sus frutos. Por eso convocamos también a la academia, a los trabajadores, al campesinado, a las comunidades indígenas, a las comunidades afrocolombianas, los gremios, a todos los sectores, mujeres, etc. a que nos unamos, nos articulemos y entendamos que el balón está en la cancha y tenemos que hacer todo lo posible para que podamos ganar este partido por la paz. La sociedad colombiana debe hacer un pacto por la defensa del acuerdo, sumemos voluntades y que esas voluntades se vayan traduciendo en acciones y las acciones que se expresen en un sentido popular.

Desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del Sistema Universitario Estatal, recordamos y reiteramos a todas las personas, que son alarmantes las cifras de ex combatientes asesinados en el año 2020. Instamos al cumplimiento de los acuerdos y respecto de esas amenazas también al despliegue de medidas urgentes de prevención y protección, lo cual sin duda es lo que va a permitir la consolidación de una paz estable y duradera y también la tranquilidad de nuestros territorios y de nuestras organizaciones civiles.

Intervención Luis Alfredo Londoño
Equipo de paz de la Universidad del Cauca
Conflictos socioambientales en el sur occidente de Colombia



¿Por qué nos están matando?

Gracias a los compañeros panelistas e igualmente a todas las personas que están conectadas en este esfuerzo que estamos haciendo desde el sur desde las universidades de seguir en este compromiso para construir la paz

Con o sin acuerdos, nos toca seguir en esta lucha de construir la paz. Considero que se ha avanzado en las anteriores presentaciones en el tema ¿Por qué nos están matando? Quiero compartir con ustedes las metodologías que estamos trabajando con varias comunidades en este proceso y extendiendo la invitación a que vayan haciendo esos mapas territoriales, esa cartografía territorial, a todos mis compañeros en el equipo de paz de las Universidades.

Desde la universidad del Cauca estamos comprometidos con el proyecto rectoral; una universidad comprometida con la paz territorial.



Este es el mapa conceptual con el que trabajamos, hay unos territorios en disputa y lo que hacemos es tratar de sistematizar estas tres grandes esferas que son las

cartografías del horror y del destierro; las del despojo que tiene que ver con las economías extractivas y la apropiación de rentas. Cartografías de la resistencia ¿Por qué nos están matando? ¿por qué los conflictos? De alguna forma han tenido nuevos ingredientes en la firma la firma del acuerdo de paz, las pandemias de donde la del covid-19 será uno de los temas que estaremos analizando y una reestructuración de mercados locales, regionales y globales.

La cartografía del horror y el destierro, es la pero de todas. Una radiografía infame, que nos muestra dónde nos están matando, cuándo. Ya tenemos una primera radiografía: la estadística, ese número o ese nombre.

La cartografía del despojo, la de las nuevas configuraciones territoriales. Algunos de esos conflictos socioambientales que subyacen a todas estas violencias. La primera de ellas indudablemente es la minería ilegal y artesanal. Ubicamos dónde están todos los proyectos mineros en el suroccidente del país.



La imagen inferior es lo que se ha llamado ya uno de los primeros ríos secos, en la cuenca del río Patía que nace en el macizo colombiano. La imagen superior izquierda es el río Dagua y a la derecha la muerte de mineros en una avalancha cerca a Santander de Quilichao.

De esta manera están quedando nuestros recursos naturales y empezamos a encontrar esas correlaciones entre los proyectos mineros, la defensa ambiental, la defensa del agua, la defensa de los territorios y de los muertos.

El suroccidente colombiano se dirige a ser una potencia minero-energética, principalmente de gas, petróleo y carbón. Está siendo invadido por proyectos energéticos para convertirse en un cinturón energético; en este sentido hay una gran cantidad de proyectos hidroeléctricos proyectados. Cultivos de caña, cultivos forestales, ya no sólo para biomasa para cartón sino también para carbón ecológico, parques eólicos y parques o granjas solares; de estas últimas ya se encuentran algunas establecidas en el territorio. Todos estos proyectos implican el desplazamiento de las comunidades, la muerte de las comunidades que se empiezan a oponer a ello.

Otro conflicto socio ambiental es el establecimiento de cultivos para la agroindustria. Cultivos masivos de yuca para la fabricación de almidones y plásticos, el caucho o las plantaciones que ya tenemos como el sorgo, soya, maíz, girasol, palma africana.

Las tierras en disputa son indudablemente otro conflicto ambiental; los cultivos con usos ilícitos como la coca, la amapola o la marihuana, ya bajo invernadero con tecnologías de producción y variedades diferentes. Esto le suma a la cartografía del despojo. Vienen a nuestros territorios y cabe señalar que ese control territorial, a los recursos naturales, que se están dando en torno al agua, al petróleo, al gas, al carbón, a las tierras, viene acompañado de un control del sistema agroalimentario, vulnerando la seguridad y soberanía alimentaria.

El componente de las cartografías de las resistencias, tiene que ver con la organización y la movilización social. En la medida que hay unas organizaciones sociales y/o movimientos sociales que hacen procesos de control territorial, entran en conflictos que ya plantearon los anteriores panelistas. Entre más fuertes sean los procesos de organización y movilización social más van a estar atentando con unos intereses económicos legales e ilegales, sociales, políticos, económicos.

En el suroccidente del país los movimientos sociales son un tema sumamente complejo, dinámico; solamente para recordar que en el año 2019 la minga social tuvo

bloqueada la carretera panamericana donde se convocaron comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, maestros, sectores urbanos, entre otros. Es interesante observar por qué fue tan difícil negociar con el Estado, que llegó a negociar con billones de pesos a la mesa negando lo que se pedía por parte de las organizaciones sociales, y esto no eran recursos para la escuela o el puesto de salud; el tema económico era lo de menos en ese momento. Se estaba negociando la política territorial, discutir el tema de uso y tenencia de la tierra, la democracia de la justicia de la paz. Por eso fue tan complejo la negociación.

Una experiencia significativa es la del municipio de Argelia, Cauca, donde encontramos un asador hecho a partir de un cilindro que lanzó las FARC. Es un símbolo de esperanza de las comunidades.

La falta de la implementación de los acuerdos de paz ha llevado otra vez a que se retroceda en lo ya avanzado en el territorio. Hoy en día no podemos llegar Argelia en horas de la noche a continuar nuestro trabajo. Hubo un momento en que tuvimos fe y esperanza de que era posible de lograr.

Otro elemento que está conflictuando las agendas territoriales es la reconfiguración de las economías locales, nacionales, globales.

Adicional a ello, la pandemia por el covid-19, que ha sido aprovechada por muchos sectores para imponer metas, control y manipulación social en esto que se denomina las sociedades del miedo. La legislación que está haciendo el gobierno de tipo dictatorial, está poniendo en evidencia esas inequidades sociales económicas, políticas, culturales, históricas y que se van a ver agravadas por todo el desempleo, la recesión económica y la virtualización que estamos padeciendo en las universidades y demás sitios de trabajo.

La pandemia está reconfigurando los territorios y las fuerzas territoriales. En el siguiente mapa vemos cómo se han visto afectadas las rutas del narcotráfico para sacar los productos en la medida que sobre la flechita rojas es que ya no pueden andar las lanchas ni los submarinos por el covid-19. Se han reactivado rutas terrestres que implican nuevos movimientos, nuevas violencias, nuevas reconfiguraciones territoriales.



Las comunidades se han organizado para hacer control social del territorio pero también los actores armados están haciendo todo el discurso exacto del gobierno en términos de covid-19 para el control territorial. En el municipio de Cajibío se vivió hace poco una masacre de una familia por incumplir un orden de movilidad.

Esto es lo que venimos haciendo para dar esa respuesta al por qué nos están matando, pero sobre todo para generar procesos de autocuidado, de cuidado solidario, cuidado comunitario a nuestros líderes que se puede lograr en la medida que empezamos a tener estas cartografías; qué hay en el territorio, por qué vienen a nuestros territorios, cuáles son los conflictos socioambientales, cuáles son las resistencias que tenemos, cómo nos afecta el incumplimiento de los acuerdos.

Esta es la mejor forma de defender nuestros territorios, de defender a nuestros líderes sociales; toda esa cartografía la estamos haciendo desde un enfoque de la investigación - acción participativa, reivindicando una investigación comprometida con los procesos sociales.

Preguntas del público.

1. ¿Cómo las acciones internacionales de lucha contra las drogas pueden afectar la cosmovisión en el uso tradicional de plantas medicinales en los grupos étnicos del país?

Camilo Gonzalez: en los convenios internacionales que hay sobre el tema de drogas se ha clasificado, por ejemplo, a la hoja de coca, como una sustancia psicotrópica estupefaciente y en un nivel de calificación alto para la prohibición. Este es un tema que ha sido debatido. Yo fui ministro de salud y estuve en la Organización Mundial de la Salud, en reunión, acompañado del presidente de Bolivia en ese momento y su ministro de salud, solicitaron una modificación de esa clasificación. Después Bolivia con Evo Morales se retiró de la OMS y del convenio internacional por ese punto planteando que no se clasificará a la mata de coca como una droga.

Por supuesto que ese concepto choca con la cosmovisión, con los usos tradicionales, con el carácter sagrado que los pueblos indígenas en muchas partes del mundo le dan a la hoja de coca; hay una división cultural. Existe un principio de la objeción cultural que ha sido incorporado en todo lo que es la jurisdicción indígena pero también en los acuerdos de La Habana, que debe ser esgrimido. La situación nacional debe profundizar el análisis y las respuestas en lo que tiene que ver no solamente con el asesinato de líderes y sus agresiones, sino por el asesinato de personas que están en proceso de paz y que fueron combatientes de las FARC. Ya tenemos este año 25 asesinatos con 198 en el último registro pero con familia pasa de 240. Esto ante una indiferencia porque hay una estigmatización. El problema central de los asesinatos tanto de los excombatientes que están en proceso de paz y líderes, es una política negacionista de estigmatización, de negación de los acuerdos, de la no implementación de un acuerdo de paz en todas sus dimensiones incluida la no estigmatización, la diversidad de un pacto de exclusión de las armas a la política, la necesidad de mensajes reales de incorporación social y política de quienes firmaron la paz y de aceptación de liderazgos sociales. Hay un ambiente de odio y una persistencia en inventar otras guerras. Y una de ellas es la de las drogas. Por eso necesitan satanizar la hoja de coca y hacer una lectura completamente militarista de las plantas, incluso de la marihuana, haciendo unas exageraciones como si fueran el demonio de los demonios;

todos los análisis científicos han mostrado que la marihuana es una planta que en su uso adulto y responsable no tiene más afectación que el alcohol o que el cigarrillo y con la hoja de coca por supuesto está completamente demostrado cuáles son sus funciones espirituales pero también sus virtudes desde el punto de vista de una planta que contribuye al bienestar de la gente.

2. ¿Qué consecuencias trae la reanudación de la aspersión aérea con glifosato en las comunidades étnicas?

Hermes Pete. Perjudica a todos los cultivos de pancoger que tienen las comunidades. Es así como los años anteriores ha perjudicado en gran manera todos los cultivos que han habido en nuestros territorios, inclusive esterilizando la madre tierra. Las consecuencia y las secuelas que dejan la aspersión de glifosato es bastante complejo, el gobierno nacional no ha entendido que al tratar de fumigar y de combatir el narcotráfico, está acabando con los cultivos de nuestros territorios.

3. ¿El asesinato sistemático a nuestros líderes sociales puede considerarse como un genocidio ante la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Camino Gonzalez: La figura de genocidio está considerada en el Estatuto de Roma y está relacionada con el propósito sistemático y tiene algunas connotaciones en cuanto a la identificación de un determinado central de esos asesinatos; pero me parece que hay sistematicidad suficiente desde el punto de vista de las características de las víctimas y de las condiciones generales y que se podría hacer una consideración por grupos sociales, es decir, genocidio en relación a poblaciones indígenas, a líderes comunitarios y habría que ver lo que está pasando con los ex combatientes. Seguramente habrá mucha dificultad para que la corte interamericana de la calificación de genocidio al caso de la unión patriótica, porque es porque en el estatuto de Roma no aparece la palabra “partido político”, pero aquí hay un grupo poblacional pero dejaremos esto a los expertos.

Pueden ver el evento completo en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=07fj534-ybA&fbclid=IwAR1XXgjsj_OON SX_qQF3GMfW0lyc9YaN1ScVLixn-JI5LLj7juV66se5tGM



SUE
Sistema Universitario Estatal